

**Crímenes, golpes de pecho y buenas intenciones:  
una breve historia del manejo del patrimonio en Colombia**

**Roberto Lleras Pérez<sup>1</sup>**

Entre patrimonio y ambiente se puede trazar un cercano paralelo. Los dos son temas de actualidad, los dos se han utilizado de todas las formas posibles para justificar determinadas posiciones y contra ambos se han cometido los más horribles crímenes. Tal vez allí termina el paralelo, porque uno y otro tienen en la práctica pesos muy diferentes sobre la vida real; pero sobre esto volveré más tarde. Por ahora concentremos en el patrimonio.

Quien, sin tener idea previa del asunto, se asomase al ambiente académico de la Colombia actual quedaría gratamente impresionado al comprobar que el tema del patrimonio recibe tanta atención. El patrimonio ha sido el objeto fundamental de discusión en varios de los encuentros de científicos sociales de los últimos cinco años, incluso del V Congreso de Arqueología en Colombia que se celebró en esta misma sede el año pasado. Si revisáramos con ánimo estadístico los títulos de las publicaciones académicas encontraríamos que el grueso de las que tienen que ver con ciencias sociales tocan el asunto del patrimonio. Construcción del patrimonio, preservación de lo patrimonial, identidad y patrimonio son los tópicos de nuevos grupos de estudio, cursos y programas en las universidades públicas y privadas del país.

Y el asunto no termina ahí, porque lo patrimonial tiene muchas ramificaciones, se extiende bajo otros temas y otras preocupaciones: la búsqueda o el reinvento de las identidades indígenas o neo-indígenas, la creación o consolidación de tejido social y la preservación de las culturas locales frente a la globalización, todas estas formas de pensamiento y de acción se paran sobre el concepto de

---

<sup>1</sup> Conferencia, Universidad de Antioquia - Museo Universitario

patrimonio. De verdad parecería que somos un pueblo dedicado al cuidado de su patrimonio, respetuoso de los valores que este encarna, reflexivo respecto de la construcción social y colectiva que lo subyace y, además, pendiente de su divulgación y promoción. Nada más falso. La realidad es otra, la verdad es que la nuestra es una historia de depredación de lo patrimonial, de absoluto irrespeto por aquello que decimos apreciar y de incoherencia total entre las declaraciones y las acciones. Para la muestra un botón, o mejor varios botones.

¿Pero, cuando empezar en la narración de esta elocuente secuencia de hechos? ¿Dónde se inicia lo que podríamos llamar con justicia la historia de nuestro patrimonio? Estas son preguntas difíciles porque no atañen solo a este aspecto sino que, por contexto, involucran todos los aspectos de la nacionalidad. ¿Desde que momento nos sentimos, pensamos y actuamos como una nación independiente y, en esa medida, reconocemos que existe un cúmulo de objetos materiales con un significado profundo que tocan las fibras más sensibles de nuestro ser social?

Yo no tengo una respuesta satisfactoria para semejante inquietud y, a falta de ella, optare por una salida poco original y de lo más convencional. Digamos que la declaración de independencia de 1810 marca ese punto de inflexión y que, por tanto, estamos justo al borde de cumplir doscientos años de tener una actitud nacional frente al patrimonio cultural. Sería menester entonces arrancar con nuestros próceres y con sus acciones frente a este asunto. Francisco de Paula Santander es una figura ambigua de la historia de Colombia, al menos en cuanto se refiere al patrimonio. Por orden suya se conformó lo que habría de ser el Museo Nacional de Colombia, un organismo dotado de ciertos recursos y con una dirección idónea, orientado a recopilar y preservar objetos raros y curiosos que pudieran dar idea de las riquezas de la Nueva Granada.

Mientras esto hacia como gobernante, Santander participaba como ciudadano y accionista en una compañía formada en conjunto con los señores Pedro y Miguel

Tovar, Miguel Pey, Bruno Espinosa y un tal maestro León, en una empresa que intento desaguar la laguna de Siecha, un sitio sagrado de los indígenas muiscas, para extraer las ofrendas que allí pudiera haber con fines comerciales, sin importar el grado de destrucción que esto pudiera ocasionar. Esta actitud ambigua que implicaba por un lado otorgar un apoyo institucional a la cultura y el patrimonio y, por el otro explotarlo con fines individuales y mezquinos va a hacer carrera de aquí en adelante y va a marcar la política deshilvanada y floja de la elite criolla.

El siglo XIX, desde 1810 hasta el amanecer del nuevo siglo, se tambalea entre estas dos formas contradictorias y curiosamente complementarias de abordar la cuestión. Después de Santander otros próceres y gobernantes tuvieron que lidiar con el asunto del patrimonio cultural. Para estos criollos, recién desembarazados de la sujeción colonial a España, el asunto era muy difícil de conciliar en su propia conciencia. Por un lado, existía la necesidad manifiesta de encontrar un pasado glorioso que le diera piso y tradición a la naciente república, nadie quería ser tachado de recién llegado al escenario de la historia mundial, los advenedizos eran vistos con malos ojos.

Para encontrar ese pasado necesario había cuatro vías teóricamente posibles: la primera era reconocerlo en la España blanca, católica y monárquica, la segunda era aceptar el legado africano, la tercera redescubrir los pueblos indígenas y la última era concebir el mestizaje como generador de nuevas posibilidades. La primera posibilidad que optaba por España era, sin duda, la más deseable desde la conciencia de clase y de casta de la elite pero era, a la vez, políticamente inaceptable. ¿Como justificar una afiliación nacional hacia una potencia contra la cual se había gestado un movimiento separatista? No se podía declarar la españolidad y, al tiempo, luchar contra las tropas de su Real Majestad.

La segunda opción, la de Africa, no era aceptable ni siquiera en reconocimiento de la sangre africana que se derramo en las batallas de la independencia, ni como tributo a las víctimas del sitio de Cartagena ni tampoco porque uno de los más

aguerridos comandantes de estas gestas, el Almirante Padilla, fuese de origen africano. Quedaban abiertas las opciones del pasado indígena y del mestizaje y con ellas se bandearon los intelectuales criollos bastante tiempo. Pero hacerlo les costó trabajo y muchos ejercicios de gimnasia mental. Era de verdad complicado construir la imagen de un pasado indígena glorioso que fuera la base étnica de la nación sin darle demasiada importancia a los pueblos indios del siglo XIX que seguían siendo perseguidos y arrinconados y que, consiguientemente, continuaban luchando por su tierra y su cultura.

Hubo soluciones teóricas inauditas a este dilema. La más común fue el retorno al argumento de la degeneración, un recurso que existía desde la conformación del paradigma cristiano de la historia: los pueblos desde su creación habían venido sufriendo una progresiva degeneración, una suerte de secuela de la caída del paraíso terrenal. Traslada a esta época, ella se interpretó como una degeneración que había ocurrido entre el siglo XVI y el XIX. Los pueblos indígenas encontrados por los conquistadores, se decía, eran modelos de progreso, virtudes y adelantos. Tras la conquista y la imposición de la dominación europea su cultura se había venido al suelo, sus valores se habían perdido, habían quedado rezagados en la historia a un papel marginal y miserable. Prueba de tan lamentable estado era el que se los podía ver en las calles en estado de ebriedad y mendicidad y que, si era necesario, se los podía despachar a patadas.

Así la naciente intelectualidad podía manejar dos imágenes contrapuestas de lo indígena que se acomodaban fácilmente en una sola teoría genética de la nacionalidad; los buenos indios de antaño, los degenerados indios del presente. Tal vez nadie logro llevar a un estado mayor de exacerbación esta dicotomía que Carlos Cuervo Márquez, uno de los más ilustres representantes de la historia decimonónica y de principios del siglo XX. Ante el II Congreso Científico Panamericano de 1915 -16 presento un estudio sobre los “Orígenes Etnográficos de Colombia”. Con respecto a los chibchas, dice este autor, que entre ellos se dieron diferencias de “carácter demográfico general”. Según el en la conformación

del pueblo chibcha habrían concurrido dos elementos distintos; el primero “autóctono de las grandes mesas andinas de Bogotá y de Tunja y de los macizos de Santander” constituyó la base de la población.

Pero este pueblo fue “...sojuzgado en tiempos remotos, muy difíciles de calcular, por pueblos más avanzados y fuertes, los cuales al darle una relativa civilización, imprimieron a cada estado el sello especial de su carácter. La existencia de clases sociales no se explica sino por la superposición de una raza superior, casi siempre conquistadora; y tanto en Tunja como en Bogotá había nobles y siervos y la nobleza era hereditaria;...” Cuervo Márquez se apoya para formular tal hipótesis en las descripciones de los cronistas quienes describieron a los nobles como “mejor proporcionados, de facciones más regulares, de piel más blanca y de carácter más altivo y enérgico que el resto de la población; caracteres todos que revelan una raza conquistadora y superior”.

Más aun, las figuras de barro cocido, que se hicieron tomando como modelo a los nobles “...llaman la atención por la regularidad y por la nobleza de la fisonomía, cuyos rasgos generales recuerdan el tipo napoleónico, que en nada se parece al de los actuales indígenas de nuestros campos.” Continúa Cuervo Márquez afirmando que a esta clase noble en cuyo seno residía el honor y el poder se sometía el resto de la población en “la más absoluta obediencia pasiva. Esta “casta desheredada es (para principios del siglo XX) la que en lo general se conserva intacta, porque la noble fue en parte destruida con la conquista y en parte se fundió con la sangre española...”.

Con esta teoría, que por absurdo que parezca, se publicó y se consideró con seriedad en esa época, se acabó de configurar el manejo nacional de lo indígena. La dualidad de concepciones y sentimientos hacia los creadores del patrimonio cultural antiguo permitían que su creación se manejase con idéntica ambigüedad. Lo indígena podía ser patrimonial y podía ser destruido, se destinaba a los museos o se fundía para obtener oro en lingotes. Con esta elaboración intelectual

apareció otra dicotomía; la del patrimonio histórico versus el patrimonio arqueológico, una distinción que aún mantenemos y que, llevada hasta sus últimas consecuencias, deriva incluso en diferentes legislaciones y normas de manejo y protección.

Este es el marco de pensamiento que explica el tratamiento inicial de lo patrimonial. Es también, en el fondo, la expresión intelectual de un conjunto de sentimientos y de actitudes; dicho de otro modo, los decimonónicos trabajaron para darle cuerpo intelectual a lo que ya sentían muy profundamente. Por eso casi todos los representantes de la intelectualidad criolla son tan contradictorios: escriben monografías sobre lo indígena y la arqueología y, sin pudor alguno, saquean yacimientos, coleccionan objetos y, si la oportunidad se presenta, los venden a los extranjeros con pleno conocimiento de que serán exportados y que el país los perderá para siempre.

En este contexto se da, por ejemplo, el episodio de la balsa de Siecha. Este objeto, excepcional, fue encontrado en 1856 por una expedición de saqueo conformada por los ilustres criollos Joaquín y Bernardino Tovar, Guillermo Paris y Rafael Chacón. La balsa fue adquirida inicialmente por el coleccionista Gonzalo Ramos Ruiz quien recibió en 1876 una oferta hecha por el Museo Etnográfico de Berlín; curiosamente la rechazó y decidió obsequiar la balsa a la esposa de Salomón Koppel, el famoso empresario alemán fundador de bancos. Siguió entonces un forcejeo diplomático y económico conducido por Adolf Bastian, un etnógrafo y aventurero alemán, quien recurrió incluso a los sentimientos nacionalistas de Koppel para que la pieza fuera a parar al museo de Berlín.

Finalmente, tras muchos ruegos, los Koppel cedieron y la pieza fue enviada por barco hacia Alemania; al llegar al puerto de Bremen se almacenó provisionalmente en un depósito, posiblemente para cumplir las formalidades aduaneras. Antes de que la balsa pudiera ser sacada del depósito, un voraz incendio la destruyó completamente. Se necesitaron algo más de cien años para que pudiéramos

contar en un museo de Colombia con un objeto comparable a esta primera balsa muisca.

Pero, por supuesto, no fue solamente la balsa de Siecha el objeto de patrimonio que corrió con esta suerte. El famoso “Tesoro de los Quimbayas” representa un tipo de comportamiento aún más grave, ya que el asunto reviste el carácter de un acto de estado. El episodio es bastante bien conocido, pero vale la pena recordar los aspectos más importantes. Su hallazgo, hecho en La Soledad (Quimbaya) en 1890, fue otro más entre los muchos que se hicieron durante la ola de g.uaquería que asoló el sur de Antioquia y el Viejo Caldas desde mediados del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX.

Las investigaciones documentales han concluido que se trataba de más de 130 piezas de oro y tumbaga, acompañadas de un buen número de cerámicas y que se hallaron en dos tumbas de pozo y cámara lateral del tipo que los g.uaqueros conocían como matecañeras. Entre 1890 y 1892 los objetos estuvieron depositados en las bóvedas de un banco comercial en Bogotá esperando ser vendidos. La negociación cayó en manos de un aventurero italiano con pretensiones de erudito; Carlo Vedovelli, que logró interesar al entonces presidente en funciones de Colombia, Carlos Holguín.

La compra se concretó y el tesoro, en lugar de pasar al Museo Nacional, permaneció a la espera de ser enviado a España para exhibirse en la Exposición Universal de 1892, conmemorativa del IV Centenario del Descubrimiento de América. Las piezas viajaron a Madrid pero ya nunca regresaron; Holguín ya había determinado obsequiarlas a la Regente María Cristina de Habsburgo como muestra de agradecimiento del país por proferir el laudo arbitral que zanjó una disputa fronteriza con Venezuela.

Adicionalmente, para financiar la participación de Colombia en la Exposición Universal de Madrid y en la de Chicago de 1893 el país contrajo créditos y dejó de

reparar la iglesia del Colegio Mayor del Rosario, un invaluable inmueble patrimonial. La negociación misma tuvo un carácter bastante turbio; se omitió el requisito legal de publicarla en el Diario Oficial y se amedrento a la prensa opositora para que no metiera las narices en el asunto. Nada parecido en cantidad y calidad al Tesoro de los Quimbayas ha vuelto a aparecer en la arqueología de Colombia.

Aun cuando, dentro de la oligarquía criolla se levantaban de vez en cuando algunas voces solitarias que clamaban por la preservación del patrimonio, lo que primaba era esta visión mercantilista o fantoche de los gobernantes autoritarios de turno. Después de Holguín no se han hecho otros regalos de este tipo, nadie ha logrado superar tal cima de insensatez, pero si se han dado actitudes permisivas con resultados parecidos.

San Agustín fue visitado por una expedición del British Museum en 1902, no hay registros de lo que se llevaron y ningún informe existe que pueda atestiguar que hubo algún tipo de investigación, solo saqueo. Algunos años más tarde, entre 1913 y 1914, el arqueólogo alemán Konrad Theodor Preuss visito el área. De Preuss si tenemos un detallado informe de excavaciones y le debemos datos valiosos; esto no puede ocultar el hecho de que cuando se devolvió a Alemania se llevó consigo un cargamento de objetos arqueológicos en el que se incluían trece estatuas que aún permanecen en el Museum Fur Volkerkunde de Berlín. Todo esto salió amparado por un permiso otorgado por el Ministerio de Instrucción Pública.

Dos años antes la laguna de Guatavita, otro sitio icónico del patrimonio colombiano, seguía siendo saqueada. Inexplicablemente el Gobierno colombiano había otorgado permiso a una empresa inglesa, Contractors Ltd., para que drenara la laguna en busca de tesoros. Esto se hizo y existe incluso una foto del fondo seco de la laguna. Contractors no logro obtener los tesoros que esperaba, pero si se llevó la más importante colección de ofrendatarios de cerámica muiscas

que existe; los objetos están hoy en día repartidos ente el British Museum y el Museum of Anthropology and Archaeology de Cambridge. Todo se hizo a la vista de las autoridades.

En 1922 el arqueólogo J. Alden Mason del Field Museum de Chicago llego a la Sierra Nevada de Santa Marta con el ánimo de dilucidar el misterio de la cultura Tairona, hasta entonces prácticamente desconocida. Mason nos dejó cuatro volúmenes cuidadosamente ilustrados con informes impecables de sus excavaciones, también opto por llevarse consigo a su museo decenas de cajas con tanto material arqueológico que aun, 87 años después, todavía no terminan de clasificar y organizar; también este ilustre norteamericano tuvo los permisos oficiales necesarios para la exportación.

Solamente la llegada de personas con un espíritu verdaderamente académico y desprovisto de la codicia mercantil por el patrimonio pudo darle un nuevo giro a los acontecimientos. La influencia de Paul Rivet y Gregorio Hernández de Alba en la arqueología de Colombia, la fundación del Instituto Etnológico Nacional y del Servicio de Arqueología, la revitalización del Museo Nacional de Colombia y la aparición del Museo del Oro, junto con las labores formativas de la Escuela Normal Superior lograron que, al menos en los escenarios visibles de la nación, el patrimonio adquiriera un estatus de respeto e inviolabilidad.

Los escenarios no visibles siguen operando, por supuesto, y en ellos el patrimonio se comercia, se exporta y se falsifica, a pesar de que más de cinco normas legales superiores, todas ellas vigentes, lo prohíben expresamente. En el fondo la actitud de la elite criolla sigue siendo básicamente igual; ya nadie se atreve a declarar de frente su apoyo a la exportación del patrimonio arqueológico, pero, en ciertos círculos, coleccionar objetos arqueológicos es un pasatiempo de lo más elegante y refinado e intercambiar piezas y conocimientos con amigos del extranjero es usual. Se puede ser, a la vez, mecenas de la cultura y coleccionista vendedor o comprador de patrimonio sin el menor problema.

Pero esto no debería sorprendernos, tenemos que recordar que la contradicción entre la valoración del pasado indígena y la conciencia de clase y casta de la elite criolla no desapareció con el siglo XIX, sigue viva y atormentando su conciencia. Las cosas arqueológicas son, finalmente, cosas de los indios y la realización de su valor en última instancia no puede apelar a la identidad cultural, es necesariamente comercial. Como mercancía pueden circular y generan ganancias económicas y, de paso, placer estético. Fin del problema.

¿Pero, que decir de otras categorías de patrimonio? ¿Acaso Colombia se ha comportado en forma distinta frente al patrimonio que denominamos histórico, es decir aquello que proviene de las épocas colonial, republicana y reciente? Veamos otros ejemplos, otros botones de esta desgarrada y triste camisa que vamos abriendo. Uno de los hitos que la historia patria recalca con mayor fuerza es el de las fundaciones. Una historia que no reconoce que los indígenas hayan fundado nada, necesariamente tiene que fijarse mucho en las que supone son las primeras fundaciones de ciudades. La fundación de Bogotá, por ejemplo, es un asunto bastante complejo. Llevamos décadas discutiendo donde se fundó la ciudad y aún no hay acuerdo.

Pero lo que pocos recuerdan es que Bogotá contó por mucho tiempo con una de las más antiguas y claras evidencias de su lugar de fundación, esto es hasta que la destruyeron. La historia, muy resumida de esta estructura es la siguiente. Aparentemente la primera misa y la instalación del cabildo que marcaron la real fundación española de la ciudad de Santafé se celebraron el 27 de abril de 1539 en una ermita ubicada al norte del río Vicachá (después bautizado San Francisco) construida por los indios de Guatavita y llamada del Humilladero. Poco tiempo después, en 1542 o 1543 la estructura de madera y paja fue reemplazada por una de barro y teja, construida por iniciativa de Don Juan Muñoz de Collantes, mayordomo de la Cofradía de la Veracruz en el solar, que para el efecto, cedió el Adelantado Alonso Luís de Lugo.

Esta segunda ermita del Humilladero fue consagrada el 6 de agosto de 1544 y no parece haber durado mucho tiempo, ya que no se menciona su existencia en 1572 cuando se incorpora la plazuela de San Francisco al área urbana de Santafé. La tercera estructura se construyó en 1591 justo en el sitio en donde se encontraba el suelo sagrado donde se ofreció la primera misa, bordeando el camino real que conducía a Tunja. En 1713 fue ampliada por Ginés de Vargas; la imagen que adquirió tras esa remodelación es la que se guarda en la mayor parte de los grabados que datan de fines del siglo XVIII y del XIX.

Tras la independencia sufrió, como el resto de la ciudad, los estragos de las guerras civiles y en 1876 Jacobo Sánchez, gobernador de Cundinamarca, la destinó para inspección de policía. Por iniciativa de la Cámara de Representantes y la Gobernación de Cundinamarca fue demolida el 2 de mayo de 1877, por considerarse que carecía de méritos históricos o arquitectónicos y que "...afea la plaza de San Francisco". Así pereció la capilla que podría haber sido el escenario de la fundación de Bogotá; hoy sus cimientos reposan bajo un par de cabinas telefónicas, una caja de inspección del acueducto y un muro de una jardinera, en la esquina noroeste del Parque Santander.

¿Pero cómo nos puede extrañar esta actitud frente al patrimonio histórico, si otros sitios de mayor envergadura sufrieron la misma suerte? Cada una de las comunidades monásticas que se asentaron en la ciudad colonial de Santafé construyó su convento, con iglesia y claustro, como lo mandaban los cánones arquitectónicos de la época. Jesuitas, dominicos, franciscanos, agustinos, capuchinos, clarisas, etc. y algunas cofradías levantaron hermosos edificios de piedra y ladrillo que, en su mayoría lograron llegar intactos hasta fines del siglo XIX o principios del XX, pese al efecto devastador de las guerras civiles y aun a pesar de la incautación de los bienes eclesiásticos del gobierno de Mosquera.

Hoy en Bogotá ya no quedan más que pocos claustros de aquella época. Casi todos fueron demolidos para dar paso, en los lotes resultantes, a los pomposos

edificios oficiales; en el de San Agustín está el Ministerio de Hacienda, en el de Santo Domingo el Ministerio de Comunicaciones, en el de San Francisco la Gobernación de Cundinamarca. El claustro de Santo Domingo, por ejemplo, se repuso de varios terremotos y alcanzo a ser positivamente valorado por la Academia de Historia, pero no logro sobrevivir la decisión oficial de destruirlo; para el presidente Eduardo Santos este era "...un estorbo máximo para el desarrollo de Bogotá". El mismo gobierno, ordeno en 1940 la demolición del claustro de San Agustín, por fortuna la iglesia de este último sobrevivió.

Los crímenes contra la arquitectura patrimonial religiosa no cesaron después de semejantes exabruptos, todavía en 1957 se demolió la iglesia colonial de Santa Inés ubicada en el sector que después se convertiría en "El Cartucho". En otras ciudades del país han ocurrido cosas semejantes, aun cuando es justo decirlo, en menor escala. Tunja, Pamplona y Popayán han logrado conservar un mayor número de sus estructuras coloniales intactas, en Bogotá el deseo de progreso, de "modernización e higienización" ha causado estragos. Es otra de las manías de la elite criolla, hay que tumbar y destruir para renovar, como si no hubiera espacio suficiente disponible para los nuevos proyectos.

Pero si la arquitectura religiosa, que inspira cierto respeto y cariño, ha sido vandalizada en esa forma, que podemos decir de los edificios civiles. Hoy en día reconocemos en Cartagena de Indias un sitio patrimonial que puede competir con los más importantes del mundo entero; esto no es por los patéticos edificios de hoteles de Bocagrande, sino gracias a los castillos, baluartes, murallas, templos y casas coloniales. La verdad es que casi todos se han salvado de milagro, porque la ciudad durante buena parte de los siglos XIX y XX fue muy pobre y no tuvo suficiente dinero para demolerlos.

La demolición de las murallas comenzó en 1883 y continuo con varias interrupciones hasta 1919, es de público conocimiento que algunos alcaldes llegaron a constituir contratos para explotar las murallas como canteras para las

nuevas construcciones de la ciudad. Cada nuevo lienzo de muralla que caía, cada baluarte que se derribaba se reclamaba como un triunfo del progreso y un desahogo para la ciudad, la oligarquía local no quería vivir en medio de tanta ruina vieja, quería una ciudad que pudiera ponerse a la par con la pujante Barranquilla. Por fortuna nunca tuvieron suficiente dinero para concluir la empresa, tumbar esas moles resultaba muy caro.

Aún después de que se suspendiera definitivamente la demolición de las defensas coloniales, en el mismo casco histórico continuó la destrucción. Entre 1926 y 1929 se demolieron varias manzanas de casas coloniales para hacer edificios de oficinas, entre ellos el de la petrolera norteamericana Andean Oil que, por su altura y volumen, destruyó la armonía arquitectónica del sector contiguo. Esto ha ocurrido con Cartagena, perla del Caribe y patrimonio histórico de los colombianos.

Pero, volvamos a Bogotá. Desde la fundación de la ciudad la construcción de puentes fue un factor fundamental para asegurar la comunicación, ya que, para donde quisieran desplazarse los santafereños tenían que cruzar ríos. Durante el periodo colonial la escasez de recursos no permitió construir más que diez de ellos, pero las administraciones republicanas lograron incrementar, hasta la segunda década del siglo XX, a cuarenta los puentes sobre los ríos San Francisco y San Agustín. Los puentes, construidos en piedra, ladrillo y concreto, el más antiguo de los cuales databa de 1602, eran una muestra muy completa de la historia y tecnología de la ingeniería civil, de más de 400 años.

Cuando se inició en 1930 la canalización de estos dos ríos y la construcción de las avenidas Sexta y Jiménez algunos puentes fueron parcialmente demolidos y otros quedaron sepultados, pero intactos al lado del colector subterráneo. En vísperas del tercer milenio la administración distrital inicio la construcción del Eje Ambiental, una serie de espejos de agua escalonados que pretende recrear la memoria del río, ahora convertido en alcantarilla subterránea. Durante las excavaciones los

obreros encontraron un puente, de 1905, maravillosamente conservado. Lejos de alegrar a los administradores, el hallazgo los perturbo. Gabriel Camargo, por entonces Director del Instituto de Desarrollo Urbano, propuso demoler la estructura y trasladarla a otro lugar donde no estorbara el desarrollo del Eje Ambiental. Por fortuna esta idea no prospero; pero el puente tampoco, hoy esta semienterrado tras una malla, sin medidas de conservación de ningún tipo. Las malas lenguas dicen, y tengo buenas razones para creerlo, que se encontraron por esa época varios puentes más, pero que se supo mantener el secreto para no causar más problemas al flamante proyecto.

¿Pero, si el estado ha actuado así frente al patrimonio que tiene a su cargo, que decir de los particulares? El tratamiento del patrimonio industrial es un claro ejemplo de la desidia y la indiferencia que sienten empresarios y corporaciones por los testimonios de su propio pasado. Las fábricas de cervezas en Bogotá fueron ejemplos de la arquitectura industrial de finales del siglo XIX y principios del XX; de la cervecería alemana, ubicada en el sector de Las Aguas queda solo parte de uno de los depósitos de despacho. La cervecería Bavaria, ubicada al norte de la calle 26 fue progresivamente demolida para dar paso a edificios de oficinas y apartamentos; se conservaron, eso si, dos de las cavas de fermentación sobre la carrera 13, el procedimiento de restauración consistió en forrar las fachadas originales de ladrillo rojo con una nueva capa de ladrillo moderno y distribuir el interior en locales para restaurantes.

El del matadero municipal de Bogotá es un caso patético: construido a finales del siglo XIX y renovado dos veces, conservaba hasta hace pocos años, en buen estado su estructura y maquinaria. Con motivo de la demolición de “El Cartucho” el alcalde Enrique Peñalosa ordeno reubicar allí a los habitantes desplazados, en su mayoría indigentes y drogadictos. Al cabo de algunos meses el lugar, reconocido oficialmente como edificio patrimonial, estaba desmantelado, ya no quedan maquinas, puertas, ventanas, techos ni parte de las paredes mismas.

Las haciendas cafeteras y los beneficiaderos de principios del siglo XX constituyen uno de los testimonios más importantes del surgimiento y crecimiento de la agroindustria más importante de la historia económica de Colombia; quedan pocas y no se hace mucho por conservarlas, una de los más grandes y completas de su tipo, ubicada en el municipio de Pandí, en Cundinamarca se cae a pedazos. Lo mismo ocurre con las ferrerías, la de Subachoque, al occidente de Bogotá ya está reducida a escombros. No sé mucho al respecto, pero no he oído hablar de viejos talleres textiles de Medellín que se hayan preservado, tampoco sé que queden testimonios de las salinas antiguas de Zipaquirá y Nemocón o las curtiembres artesanales de Villapinzón.

Bueno, y así podríamos seguir con muchos ejemplos más. De seguro en el auditorio ya muchos han recordado casos particulares que conocen de cerca, que alguna vez oyeron mencionar, o que lamentaron sin poder hacer nada. Mi reflexión final es que todo esto contrasta mucho y muy chocantemente con el discurso académico. Hay una explosión de verborrea, ya francamente fastidiosa, alrededor del tema del patrimonio.

No obstante, estoy seguro que el tema aún se seguirá tratando; la razón es que es un buen sofisma de distracción. El patrimonio es una forma simbólica de propiedad que se puede otorgar, también simbólicamente, a quien nada tiene. El proceso por el cual se estimula la construcción y apropiación del patrimonio cultural llena un vacío en las comunidades desposeídas, y lo hace dejando intacta la propiedad real de los medios de producción. Los factores objetivos de la lucha de clases se distorsionan en la conciencia y se generan espacios de distensión que convienen mucho a la elite dominante. A fin de cuentas, la lucha social enfocada hacia el patrimonio es controlable y las concesiones en este campo se pueden otorgar, sin que nada cambie. Podemos vivir sin el patrimonio, pero preferimos vivir con él, nos hace sentir más ricos en algún sentido no muy bien definido y por eso estamos dispuestos a luchar. En último término también nos puede ser arrebatado.